

PROBABLEMENTE nunca se conocerá el intrincado circuito que hubo de seguir el ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, para atravesar Barcelona en medio del colapso circulatorio y llegar entre manifestación y manifestación desde el aeropuerto a la Fundación Puigvert, y de allí a un restaurante típico, donde le esperaban los diputados negociadores del Estatuto. Si los manifestantes que cortaban la autopista en Badalona, a tres kilómetros del restaurante, hubiesen sabido que por allí andaba un ministro, seguramente habrían disuelto voluntariamente el tapón para acudir a la cena y preguntar al ministro Pérez Llorca qué pretende en realidad su colega José Manuel Otero Novas al haber provocado el mayor desbarajuste que se recuerda en un principio de curso.

La operación ministerial de crear caos programado o de actuar con una imprevisión milimétricamente calculada, como ha escrito en su editorial un diario barcelonés, no ha cogido con la guardia baja a los nuevos Ayuntamientos democráticos. En 1978, cuando se creía que las elecciones municipales iban a celebrarse en junio, los últimos Ayuntamientos del franquismo ya habían abandonado el tema escolar, confiando que el inicio del curso siguiente iba a producirse con el relevo democrático. Cuando en un pleno de madrugada celebrado en el palacio de las Cortes en marzo se conoció la noticia del aplazamiento de las municipales —que se celebrarían exactamente un año después—, los alcaldes del franquismo se las desearon para poder cubrir los compromisos y que la trampa mortal que habían preparado para sus sucesores no los atrapase a ellos mismos.

Un año después, las cosas han sucedido de modo distinto al previsto. Habiendo advertido los eternos candidatos a las alcaldías la maniobra de los alcaldes en el 78 la presión popular, dirigida todavía desde fuera de los consistorios por los que ahora son alcaldes y concejales, logró que los últimos Ayuntamientos franquistas no preparasen una trampa mortal en el terreno escolar provocando un caos a principios del curso 79-80. En virtud de esa previsión, no puede decirse que en este inicio de curso es-



Manifestación de maestros en paro, celebrada en Barcelona para pedir más puestos de trabajo.

CATALUNA

Del desprecio de Otero Novas a la gymkhana de Pérez Lloca

MANUEL CAMPO VIDAL

colar faltasen demasiadas aulas. Por lo tanto, la única posibilidad de llevar el desbarajuste a los nuevos Ayuntamientos era recortando el número de maestros. Otero Novas disponía de ese recurso y lo ha utilizado. La cuestión es bien sencilla.

No puede hablar el Ministerio de sorpresa por el número de maestros que la provincia de Barcelona ha terminado necesitando. Los nuevos concejales de enseñanza de las poblaciones del cinturón industrial de Barcelona y la Delegación del Ministerio de Cultura elaboraron una previsión de necesidades antes del verano y resultó una cifra de maestros necesarios que alcanzaba los 2.085. El Ministerio de Otero Novas sabía, por tanto, los maestros que iban a necesitarse. Difícilmente puede hablarse de un exceso de demanda en la enseñanza estatal por parte de Cataluña, cuando la Generalitat confirma que frente al promedio de un 62 por 100 de enseñanza estatal en España, Cataluña dispone sólo de un 47 por 100. El promedio descendiendo todavía en la provincia de Barcelona, donde la media de escuelas estatales es de un 42, que aún descendiendo a 32 en el cinturón industrial de la gran ciudad. Respondería a ese argumento

capital el Ministerio facilitando otros datos, que a su vez desmentiría y corregiría el Ayuntamiento de Barcelona, para terminar diciendo el gabinete de notas de réplica de Otero Novas que el problema era de presupuesto.

A la espera de que el problema se solucione definitivamente, lo que debería suceder en la presente semana, todas las impresiones recogidas en Cataluña coinciden en que se ha producido un error de cálculo político de Otero Novas y de la UCD. Una superposición del mapa del conflicto escolar con el mapa electoral de Cataluña advierte inmediatamente que, tras el recorte de maestros, existía o parecía existir la voluntad de que la población crispada acabase con el crédito de confianza concedido a los Ayuntamientos de izquierdas. Pero existió un grave fallo en la apreciación y en lugar de volcarse la población contra los Ayuntamientos —lo que sin duda no dejaron de intentar algunos grupúsculos—, la población, los Ayuntamientos y los sindicatos, junto con los partidos políticos y la Generalitat, se volcaron contra el Ministerio y UCD. Llegó el día 17, acudieron las madres con sus hijos a las escuelas y se encontraron que donde no faltaban

maestros faltaban pupitres. Y advertida la población como estaba, se fueron hacia los Ayuntamientos, y de allí, con los concejales en la mayoría de los casos, hacia las carreteras y autopistas.

El conflicto ha supuesto otras cosas como, por ejemplo, el primer enfrentamiento serio Gobierno-Generalitat. Hay algo que en Cataluña no se perdona, decía en estos días un miembro del Gobierno de la Generalitat, y es la ruptura unilateral de un pacto. Si Otero y el consejero catalán de Cultura, Pi Sunyer, habían llegado a un acuerdo, ya no se puede admitir que Otero después no cumpliera el pacto.

A la dura nota de réplica de la Generalitat, que fue leída a los miles de manifestantes —más de 250.000 personas se han movillado en estos días— desde los balcones de los Ayuntamientos, respondió el Ministerio con otra nota, en la que poco menos se calificaba de embustes los argumentos del Gobierno preautonómico catalán. Correspondió al Ayuntamiento de Barcelona el nuevo desmentido sin palabras duras, pero con números claros, probablemente para reducir la tensión Generalitat-Ministerio, que amenazaba con pasar a una fase más grave. ■